

5 de junio: Día Mundial del Medio Ambiente

Crisis ambiental reclama soluciones verdaderas en clave de justicia

REDES – Amigos de la Tierra Uruguay participa este domingo de la Feria Agroecológica del Parque Rodó, para reconocer el compromiso y la labor de quienes día a día producen los alimentos saludables que necesitamos, al tiempo que cuidan del ambiente. La organización ambientalista reafirma junto a productoras/es y consumidoras/es la importancia de la soberanía alimentaria y la Agroecología.

El viernes REDES – AT estuvo también en Guichón, junto al Grupo de Guichón en Defensa de los Bienes Naturales, en un seminario que permitió denunciar los procesos de contaminación y la impunidad de las empresas responsables. Allí se reivindicó la necesidad de un Tratado Vinculante de la ONU para acabar con la impunidad de las empresas transnacionales responsables de violaciones de derechos humanos y crímenes ambientales, y permitir el acceso a la justicia a las comunidades afectadas por el accionar de esas empresas.

Cada Día Mundial del Medio Ambiente es una invitación a la reflexión y el balance sobre la situación ambiental del país. REDES – AT reafirma este año que el modelo del agronegocio que se ha impuesto en los territorios de nuestro país es claramente responsable de generar y exacerbar la crisis socio-ambiental y atentar contra la realización de derechos fundamentales. Ese modelo ha provocado el deterioro de nuestros cursos de aguas, en particular por contaminación y la eutrofización, pero también por alterar el ciclo hidrológico. Lamentablemente, otras consecuencias, como el impacto en la salud de la población por la intensificación del uso de agrotóxicos, no tienen el grado de visibilidad que deberían, a pesar del trabajo tenaz y las denuncias de las comunidades afectadas.

El Estado tiene un gran debe, tanto en el diagnóstico de la situación, como en la prevención y la garantía de justicia para las/os damnificadas/os, mayoritariamente quienes viven en el medio rural. Esto a pesar de que Uruguay firmó y ratificó el Acuerdo de Escazú, sobre acceso a la información, participación efectiva y acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Los incendios forestales reflejan también la pasividad y falta de control estatal sobre el accionar de las empresas transnacionales responsables, que gozan de total impunidad, al tiempo que las víctimas no tienen ninguna garantía de acceso a la justicia y a reparaciones.

A lo anterior se suma que el gobierno ha cuestionado y catalogado los planteos de la Agroecología como ideológicos y, por lo tanto, ha presionado para lograr la eliminación de la dimensión de la justicia social y la crítica al agronegocio. Además, no ha incluido en el presupuesto los recursos públicos necesarios para la implementación del Plan Nacional de Agroecología y ha debilitado herramientas como el Instituto Nacional de Colonización (INC), que hacen posible el derecho a la tierra y una gestión más democrática y cuidadosa del territorio en manos de la producción familiar.

Por otra parte, nos enfrentamos a nuevas iniciativas que cuestionan la decisión de nuestro pueblo en el plebiscito de 2004 de consagrar en la Constitución el derecho humano al agua y que los servicios públicos de agua y saneamiento, incluyendo la potabilización del agua y su distribución, sean prestados exclusivamente por personas jurídicas estatales, es decir públicas. La promoción del gobierno nacional del proyecto Neptuno, para la potabilización del agua del Río de la Plata, es una ruptura y violación a lo establecido en la normativa.

Además, el hecho de que los tres proyectos presentados por privados para potabilización de agua se basen en la extracción del Río de la Plata, genera otra señal de alarma. El principal argumento del gobierno para llevar adelante estos proyectos es que la calidad de las aguas está altamente

comprometida y que no se sabe si se puede revertir. En lugar de apostar a la recuperación de las cuencas, la actual administración deja que continúe el proceso de deterioro de las aguas y abre la puerta a proyectos muy cuestionables desde el punto de vista ambiental, y que conducirán a procesos de privatización.

El Ejecutivo apuesta por falsas soluciones que intentan maquillar de verde modelos y sistemas productivos y de gestión de territorio enormemente destructivos y que violan derechos fundamentales, en pro del beneficio de las empresas. REDES – AT reclama, en contrapartida, políticas públicas que promuevan y permitan escalar las soluciones reales de las comunidades locales y la agricultura familiar agroecológica, que día a día produce alimentos saludables contribuyendo a nuestra soberanía alimentaria al tiempo que protege nuestros cursos de agua, suelos y la biodiversidad.

Por más información:

REDES – Amigos de la Tierra Uruguay (www.redes.org.uy)

José Elosegui

098 846 967

jelosegui@gmail.com